Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

Auxiliares Administrativos/as
Primer ejercicio de Naturaleza Teórica
miércoles, 10 de diciembre de 2025

Modelo 1

1. **Conforme al artículo 114.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el ámbito estatal ponen fin a la vía administrativa los actos y resoluciones siguientes: (señalar la respuesta INCORRECTA)**

a) En los Organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de la Administración General del Estado, los emanados de los máximos órganos de dirección colegiados exclusivamente, de acuerdo con lo que establezcan sus estatutos, salvo que por una norma se establezca otra cosa.

b) Los actos administrativos de los miembros y órganos del Gobierno.

c) Los emanados de los órganos directivos con nivel de Director general o superior, en relación con las competencias que tengan atribuidas en materia de personal.

d) Los emanados de los Ministros y los Secretarios de Estado en el ejercicio de las competencias que tienen atribuidas los órganos de los que son titulares

2. **Según el artículo 13 de la ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en aquellos procedimientos en los que las alegaciones de la parte actora se fundamenten en actuaciones discriminatorias, por razón de sexo, ¿a quién corresponderá probar la ausencia de discriminación en las medidas adoptadas y su proporcionalidad?:**

a) A la persona demandante.

b) A la persona demandada.

c) Al comité de empresa.

d) A los sindicatos.

3. **De conformidad con el artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado:**

a) Se entenderá aceptada cuando hayan transcurridos 10 días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.

b) Se entenderá rechazada cuando hayan transcurridos 10 días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.

c) Se entenderá aceptada cuando hayan transcurridos 10 días hábiles desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.

d) Se entenderá rechazada cuando hayan transcurridos 10 días hábiles desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.

4. **De conformidad con el artículo 95.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su paralización por causa imputable al mismo, la Administración le advertirá que se producirá la caducidad del procedimiento, transcurridos:**

a) 1 mes.

b) 3 meses.

c) 6 meses.

d) 12 meses.

5. **De conformidad con el artículo 32.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso administrativo de los actos o disposiciones administrativas:**

a) Presupone, por sí misma, derecho a la indemnización.

b) No presupone, por sí misma, derecho a la indemnización.

c) Presupone, por sí misma, derecho a la indemnización, salvo que una norma disponga lo contrario.

d) Ninguna respuesta es correcta.

6. **Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en cuanto a los criterios de adjudicación: (señalar la respuesta INCORRECTA)**

a) El servicio postventa puede ser un criterio de adjudicación de un contrato de suministro.

b) Las mejoras pueden establecerse como criterio de adjudicación.

c) Un criterio de adjudicación en un contrato de obras no puede estar relacionado con el coste de vida de ésta.

d) Se puede establecer como criterio de desempate un sorteo entre las empresas licitadoras.

7. **De las siguientes afirmaciones relativa a un convenio de colaboración entre el órgano administrativo concedente de la subvención y la entidad colaboradora, señale la incorrecta:**

a) El convenio deberá contener el plazo de duración del mismo, que no podrá ser superior, posibles prórrogas incluidas, a cinco años.

b) La prórroga de un convenio de colaboración se adoptará por mutuo acuerdo de las partes.

c) Un Cabildo Insular puede actuar como Entidad colaboradora.

d) Puede existir un Convenio de colaboración entre un Ayuntamiento, como órgano concedente, y la Administración General del Estado, como entidad colaboradora.

8. **Señalar un principio de conducta de los empleados públicos de conformidad con el artículo 54 del Real Decreto Legislativo 5/2025, de 30 de octubre, por el que se aprueba en Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público:**

a) Respetar la Constitución y el resto de normas que integran el ordenamiento jurídico.

b) Cumplir con diligencia las tareas que les correspondan o se les encomienden y, en su caso, resolver dentro de plazo los procedimientos o expedientes de su competencia.

c) Informar a los ciudadanos sobre aquellas materias o asuntos que tengan derecho a conocer, y facilitar el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.

d) Actuar de acuerdo con los principios de eficacia, economía y eficiencia, y vigilar la consecución del interés general y el cumplimiento de los objetivos de la organización.

9. **Conforme al artículo 102 de la Constitución Española, si la acusación al Presidente del Gobierno y demás miembros del Gobierno fuera por traición o delito contra la seguridad del estado en el ejercicio de sus funciones, solo podrá ser planteada por iniciativa de:**

a) 1/4 parte de los miembros del Congreso con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo.

b) 1/4 parte de los miembros del Gobierno con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo.

c) 1/3 parte de los miembros del Congreso con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo.

d) 1/3 parte de los miembros del Gobierno con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo.

10. **En base al artículo 14 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos personales y garantía de derechos digitales, si un interesado en un Ayuntamiento solicita la rectificación de datos inexactos, ¿qué debe aportar para justificarlo?:**

a) Una declaración jurada.

b) Un documento o prueba que acredite la inexactitud y, en su caso, la rectificación solicitada.

c) El Ayuntamiento deberá de proceder a verificar dichos datos de oficio.

d) No es necesario que justifique dicha rectificación.

11. Según la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, para la creación y supresión de municipios y alteración de términos municipales, se requiere el voto favorable de:

a) La mayoría absoluta del número legal de miembros de las Corporaciones.

b) La mayoría simple del número legal de miembros de las Corporaciones.

c) La mayoría cualificada del número legal de miembros de las Corporaciones.

d) La mayoría de un tercio del número legal de miembros de las Corporaciones.

12. A los efectos previstos en el artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se entiende por comparecencia en la sede electrónica:

a) El acceso por el interesado a la Sede electrónica.

b) El acceso por el interesado o su representante debidamente identificado al contenido de la notificación.

c) La puesta al alcance del interesado del contenido de la resolución.

d) Ninguna de las anteriores es correcta.

13. Conforme establece el Título I del Libro Segundo de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, señale la respuesta correcta:

a) En un contrato basado en un Acuerdo Marco es necesaria su formalización.

b) La duración de un Acuerdo Marco puede exceder de cuatro años.

c) La duración de un contrato basado será la misma que la del Acuerdo Marco.

d) La notificación de la adjudicación de un contrato basado a aquellas empresas que no han resultado adjudicataria no podrá sustituirse por una publicación en el medio que así determine los pliegos reguladores del Acuerdo Marco.

14. En relación con los Pliegos que rigen una licitación, señale la respuesta incorrecta:

a) El pliego de cláusulas administrativas particulares se puede aprobar después de la autorización del gasto pero siempre antes de la licitación del contrato o, de no existir ésta, antes de su adjudicación.

b) La aprobación de un Pliego de cláusulas administrativas generales por parte de un Ayuntamiento requiere el informe previo del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma a la que pertenezca el municipio.

c) El pliego de prescripciones técnicas particulares, salvo que se justifique, no puede hacer referencia a una marcas, patentes o tipos de un producto.

d) No forman parte de un Pliego de prescripciones técnicas particulares los criterios de solvencia técnica.

15. Las trabajadoras embarazadas de conformidad con la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales:

a) Tendrán derecho a ausentarse del trabajo, sin derecho a remuneración, para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, previo aviso al servicio de prevención y justificación de la necesidad de su realización dentro de la jornada de trabajo.

b) Tendrán derecho a ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, previo aviso al empresario y justificación de la necesidad de su realización dentro de la jornada de trabajo.

c) Tendrán derecho a ausentarse del trabajo, sin derecho a remuneración, para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, previo aviso al empresario y justificación de la necesidad de su realización dentro de la jornada de trabajo.

d) Tendrán derecho a ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, previo aviso al servicio de prevención y justificación de la necesidad de su realización dentro de la jornada de trabajo.

16. En relación con los procedimientos de responsabilidad patrimonial, de conformidad con el artículo 34.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la cuantía de la indemnización se calculará con referencia:

a) Al día siguiente en que la lesión efectivamente se produjo.

b) Al día en que la lesión efectivamente se produjo.

c) Al día en que se inicia el procedimiento de responsabilidad patrimonial.

d) Al día en que el interesado presenta registro solicitando el inicio del procedimiento de responsabilidad patrimonial.

17. De conformidad con el artículo 15 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, los principios de la acción preventiva por parte del empresario NO incluyen:

a) Adoptar medidas que antepongan la protección individual a la colectiva.

b) Tener en cuenta la evolución de la técnica.

c) Adaptar el trabajo a la persona.

d) Evaluar los riesgos que no se pueden evitar.

18. Según el artículo 24.4 de la Ley 40/2015. de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, si el recusado niega la causa de recusación, el superior resolverá:

a) En el plazo de tres días, previos los informes y comprobaciones que considere oportunos.

b) En el plazo de cinco días, solicitando informes vinculantes y realizando las comprobaciones que considere.

c) En el plazo de diez días, previos los informes y comprobaciones que considere oportunos.

d) En el plazo de doce días, solicitando informes vinculantes y realizando las comprobaciones que considere.

19. De conformidad con lo establecido en el artículo 76.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en todo momento podrán los interesados alegar los defectos de tramitación y, en especial, los que supongan:

a) Paralización, infracción de los plazos preceptivamente señalados o la omisión de trámites que pueden ser subsanados antes de la resolución provisional del asunto.

b) Paralización, infracción de los plazos preceptivamente señalados o la omisión de trámites que pueden ser subsanados antes de la resolución definitiva del asunto.

c) Caducidad, infracción de los plazos preceptivamente señalados o la omisión de trámites que pueden ser subsanados antes de la resolución provisional del asunto.

d) Caducidad, infracción de los plazos preceptivamente señalados o la omisión de trámites que pueden ser subsanados antes de la resolución definitiva del asunto

20. Según el artículo 12.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, si algún interesado no dispone de los medios electrónicos necesarios:

a) Su identificación o firma electrónica en el Procedimiento administrativo podrá ser válidamente realizada por un funcionario público mediante el uso del sistema de firma electrónica del que esté dotado para ello.

b) No podrá tramitarse el expediente por no disponer de medios electrónicos.

c) Su identificación o firma electrónica en el Procedimiento administrativo únicamente deberá ser válidamente realizada por una autoridad mediante el uso del sistema de firma electrónica del que esté dotado para ello.

d) Su identificación o firma electrónica en el procedimiento administrativo no podrá ser válidamente realizada por un funcionario público mediante el uso del sistema de firma electrónica del que este dotado para ello.

21. Respecto a la convalidación de los actos recogido en el artículo 52 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, indicar la respuesta incorrecta:

a) La Administración podrá convalidar los actos anulables, subsanando los vicios de que adolezcan.

b) El acto de convalidación producirá efecto desde su fecha, salvo lo dispuesto en el artículo 39.3 para la retroactividad de los actos administrativos.

c) Si el vicio consistiera en incompetencia no determinante de nulidad, la convalidación podrá realizarse por el órgano superior jerárquico del que dictó el acto viciado.

d) Si el vicio consistiese en la falta de alguna autorización, podrá ser convalidado el acto mediante el otorgamiento de la misma por el órgano competente.

22. Según el artículo 86.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los instrumentos de terminación convencional del procedimiento deberán establecer como contenido mínimo:

a) La identificación de las partes intervinientes, el ámbito personal, funcional y territorial, y el plazo de vigencia, debiendo publicarse o no según su naturaleza y las personas a las que estuvieran destinados.

b) La identificación de las partes intervinientes, el ámbito profesional, funcional y territorial, y el plazo de vigencia, debiendo publicarse o no según su naturaleza y las empresas a las que estuvieran destinados.

c) La identificación de las partes afectadas, el ámbito profesional, funcional y territorial, y el plazo de vigencia, debiendo publicarse o no según su naturaleza y las empresas a las que estuvieran destinados.

d) La identificación de las partes afectadas, el ámbito personal, funcional y territorial, y el plazo de prescripción, debiendo publicarse o no según su naturaleza y las personas a las que estuvieran destinados.

23. La evaluación del desempeño establecida en el artículo 20 del Real Decreto Legislativo 5/2025, de 30 de octubre, por el que se aprueba en Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, señala:

a) Las Administraciones Públicas podrán establecer reglas que permitan la evaluación del desempeño de sus empleados.

b) La evaluación del desempeño es el procedimiento mediante el cual se mide y valora la conducta personal y objetivos de los empleados públicos.

c) Los sistemas de evaluación del desempeño se adecuarán, en todo caso, a criterios de transparencia, objetividad imparcialidad y no discriminación y se aplicarán sin tener en cuenta los derechos de los trabajadores.

d) Ninguna de las anteriores es correcta.

24. Según el artículo 165.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el presupuesto general contendrá para cada uno de los presupuestos que en él se integren: (señalar la respuesta INCORRECTA)

a) Las Bases de ejecución.

b) Derechos y obligaciones pendientes de liquidar.

c) Estado de gastos.

d) Estados de ingresos.

25. Entre los factores recogidos en el artículo 24 del Real Decreto Legislativo 5/2025, de 30 de octubre, por el que se aprueba en Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, a los que atenderán las Administraciones Públicas para establecer la cuantía y estructura de las retribuciones complementarias de los funcionarios, no se encuentra:

a) La progresión alcanzada por el funcionario dentro del sistema de carrera administrativa.

b) La especial dificultad técnica, responsabilidad, dedicación, incompatibilidad exigible para el desempeño de determinados puestos de trabajo o las condiciones en que se desarrolla el trabajo.

c) El grado de interés, iniciativa o esfuerzo con que el funcionario desempeña su trabajo y el rendimiento o resultados obtenidos.

d) Los servicios extraordinarios prestados dentro de la jornada normal de trabajo.

26. Conforme el artículo 48 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos personales y garantía de derechos digitales, la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos y su Adjunto serán nombrados por:

a) El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia, entre personas de reconocida competencia profesional, en particular en materia de protección de datos.

b) El Presidente del Gobierno a petición del Ministerio de Función Pública entre personas de reconocida competencia profesional, en particular en materia de protección de datos.

c) El Presidente del Gobierno a petición del Ministerio de Justicia entre personas de reconocida competencia profesional, en particular en materia de protección de datos

d) El Presidente del Gobierno.

27. De conformidad con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, de las siguientes afirmaciones, señale la correcta:

a) El valor estimado de un contrato está compuesto por el presupuesto base de adjudicación, las eventuales prórrogas del contrato y las modificaciones prevista en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

b) El precio de un contrato siempre deberá expresarse en euros.

c) La revisión del precio de un contrato no se aplicará, entre otros aspectos, a los costes financieros ni al beneficio industrial.

d) En el presupuesto base de licitación de un contrato se excluye, salvo disposición en contrato, el importe del IVA.

28. ¿Cuál de los siguientes actos no requiere firma del interesado según el artículo 11.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?:

a) Formular solicitudes.

b) Interponer recursos.

c) Desistir de acciones.

d) Aceptar derechos.

29. En relación con las sanciones por infracciones en materia de subvenciones, de las siguientes afirmaciones, señale la correcta:

a) Solo podrán recaer en los beneficiarios.

b) Deberán ser pecuniarias.

c) Podrán ser no pecuniarias en caso de comisión de infracciones leves.

d) El importe de las sanciones graves y muy graves a un mismo infractor por cada subvención no excederá en su conjunto del triple del importe de la cantidad indebidamente obtenida, aplicada y no justificada.

30. El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, establece en su artículo 31 que la base imponible de las contribuciones especiales está constituida:

a) Como máximo por el 70% del coste que la entidad local soporte por la realización de las obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios.

b) Como máximo por el 90% del coste que la entidad local soporte por la realización de las obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios.

c) El 100% del coste que la entidad local soporte por la realización de las obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios.

d) Cómo máximo por el 50% del coste que la entidad local soporte por la realización de las obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios.

31. Según el artículo 116 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, serán causas de inadmisión las siguientes:

a) Haber transcurrido el plazo para la resolución del recurso.

b) Carecer el recurso de la identidad del interesado.

c) Cometer un error en la calificación del recurso.

d) Ser incompetente el órgano administrativo, cuando el competente perteneciera a otra Administración Pública.

32. De conformidad con el artículo 87 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, antes de dictar resolución, el órgano competente para resolver:

a) Decidirá, mediante acuerdo motivado, la realización de las actuaciones complementarias indispensables para resolver el procedimiento.

b) Decidirá, mediante acuerdo motivado, la realización de las actuaciones complementarias indispensables o no indispensables para resolver el procedimiento.

c) Podrá decidir, mediante acuerdo motivado, la realización de las actuaciones complementarias indispensables para resolver el procedimiento.

d) Podrá decidir, mediante acuerdo motivado, la realización de las actuaciones complementarias indispensables o no indispensables para resolver el procedimiento.

33. En atención a lo previsto en el artículo 112.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra las disposiciones administrativas de carácter general:

a) No cabrá recurso en vía administrativa, salvo el recurso extraordinario de revisión.

b) No cabrá recurso en vía administrativa, salvo el recurso potestativo de reposición.

c) No cabrá recurso en vía administrativa, salvo el recurso de alzada.

d) No cabrá recurso en vía administrativa.

34. Conforme al artículo 114.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ponen fin a la vía administrativa: (señalar la respuesta INCORRECTA)

a) Las resoluciones de los procedimientos a que se refiere el artículo 112.2 de la Ley 39/2015.

b) Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de iniciadores del procedimiento.

c) Las resoluciones de los recursos de alzada.

d) Las demás resoluciones de órganos administrativos cuando una disposición legal o reglamentaria así lo establezca.

35. Conforme a la regulación que de la potestad de modificación de un contrato administrativo establece los artículos 203 y siguientes de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, señale la respuesta correcta:

a) La modificación del precio de un contrato podrá llevar el reajuste de la garantía definitiva inicialmente constituida.

b) En la tramitación de un expediente de modificación de un contrato nunca es necesaria la previa conformidad del contratista.

c) La modificación de un contrato requiere que previamente se haya previsto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

d) La modificación de un contrato no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previsto en el contrato.

36. Conforme lo dispuesto en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿qué sujetos no están obligados a relacionarse con las Administraciones Públicas de forma electrónica?:

a) Las personas jurídicas.

b) Los empleados públicos para los tramites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de funcionarios.

c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que no se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional.

d) Las entidades sin personalidad jurídica.

37. Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, señale la respuesta incorrecta:

a) La ejecución de una obra de manera conjunta con la redacción del Proyecto, tiene la consideración de contrato de obras.

b) La adquisición de un programa de ordenador desarrollado a medida tiene la consideración de un contrato de suministro.

c) Un contrato mixto puede incluir prestaciones de un contrato de obras con prestaciones de un contrato de concesión.

d) Un contrato privado celebrado por una Administración Pública le podrá ser de aplicación la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

38. Según el artículo 133 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, la gestión económico-financiera se ajustará a los siguientes criterios: (señalar la respuesta INCORRECTA)

a) Cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación que lo regule.

b) Separación de las funciones de contabilidad y de fiscalización de la gestión económico-financiera.

c) La contabilidad se ajustará en todo caso a las previsiones que en esta materia contiene la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.

d) La asignación de recursos, con arreglo a los principios de eficacia y eficiencia, se hará en función de la definición y el cumplimiento de objetivos.

39. La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, establece en su artículo 126.2 que el Alcalde podrá nombrar como miembros de la Junta de Gobierno Local a personas que no ostenten la condición de Concejales:

a) Siempre que su número no supere un quinto de sus miembros, excluido el Alcalde.

b) Siempre que su número no supere un quinto de sus miembros, incluido el Alcalde.

c) Siempre que su número no supere un tercio de sus miembros, excluido el Alcalde.

d) Siempre que su número no supere un tercio de sus miembros, incluido el Alcalde.

40. En atención a lo reconocido en el artículo 94.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, todo interesado podrá renunciar a sus derechos:

a) Cuando ello no esté prohibido por el ordenamiento jurídico.

b) En todo caso.

c) Nunca.

d) Nunca, salvo que el ordenamiento jurídico lo autorice.

41. Según el Título II de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, quienes tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas, son titulares, en sus relaciones con ellas, del derecho: (señalar la incorrecta)

a) A exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y autoridades, cuando así corresponda legalmente.

b) A la obtención y utilización de los medios de identificación y firma electrónica contemplados en esta Ley.

c) A la protección de datos de carácter personal, excepto la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las Administraciones Públicas.

d) A ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones Públicas.

42. De conformidad con el artículo 30 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, si el plazo se fija en meses o años, éstos se computarán a partir:

a) Del día en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el día en que se produzca la estimación o desestimación por silencio administrativo.

b) Del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o desestimación por silencio administrativo.

c) Del día en que tenga lugar la notificación o publicación del acto que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o la desestimación por silencio administrativo.

d) Del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate o desde el día en que se produzca la estimación o la desestimación por silencio administrativo.

43. Según el artículo 57 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento, cualquiera que haya sido la forma de su iniciación, podrá disponer:

a) De oficio o a instancia de parte, su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión, siempre que sea el mismo órgano quien deba tramitar y resolver el procedimiento.

b) De oficio o a petición de superior jerárquico, su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión, con independencia de que sea el mismo órgano quien deba tramitar y resolver el procedimiento.

c) De oficio o a petición de superior jerárquico, su acumulación a otros con los que guarde identidad temporal o íntima conexión, siempre que sea el mismo órgano quien deba tramitar y resolver el procedimiento.

d) De oficio o a instancia de parte, su acumulación a otros con los que guarde identidad temporal o íntima conexión, con independencia de que sea el mismo órgano quien deba tramitar y resolver el procedimiento.

44. Conforme al artículo 65.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el acuerdo de iniciación del procedimiento de responsabilidad patrimonial se notificará a los particulares presuntamente lesionados para que aporten cuantas alegaciones, documentos o información estimen conveniente a su derecho y propongan cuantas pruebas sean pertinentes para el reconocimiento del mismo, concediéndoles para tal fin un plazo de:

a) 30 días.

b) 20 días.

c) 15 días.

d) 10 días.

45. Señalar la afirmación correcta en relación con la reforma de la Constitución Española conforme a lo previsto en el Título X de la misma:

a) Se podrá iniciar en cualquier momento.

b) Si se propusiese la revisión total de la Constitución se procederá a la aprobación por mayoría de un tercio del Gobierno.

c) No se podrá iniciar si está declarado el estado de excepción.

d) Una vez aprobada la reforma por el Gobierno deberá ser sometida a referendum.

46. Respecto a la exigencia de la responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas, señalar la afirmación incorrecta:

a) Para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial, los particulares exigirán directamente a la Administración Pública correspondiente las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados por las autoridades y personal a su servicio.

b) La Administración instruirá procedimiento a las autoridades y demás personal a su servicio por los daños y perjuicios causados en sus bienes o derechos cuando hubiera concurrido dolo, o culpa o negligencia leve.

c) Para la exigencia de dicha responsabilidad y, en su caso, para su cuantificación, se ponderarán, entre otros, los siguientes criterios: el resultado dañoso producido, el grado de culpabilidad, la responsabilidad profesional del personal al servicio de las Administraciones públicas y su relación con la producción del resultado dañoso.

d) La resolución declaratoria de responsabilidad pondrá fin a la vía administrativa.

47. En relación con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, de las siguientes afirmaciones, ¿cuál es correcta?:

a) En la licitación de un contrato de suministro por procedimiento abierto, regulación armonizada, el plazo de presentación de proposiciones no puede ser superior a treinta y cinco días.

b) En un procedimiento abierto simplificado no puede haber ningún criterio de adjudicación evaluable mediante juicio de valor.

c) En un procedimiento restringido cualquier empresario puede presentar proposición.

d) El precio de un contrato menor de servicio y/o suministro puede ser superior a 15.000,00 €.

48. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, establece que:

a) Las ausencias o faltas de puntualidad al trabajo motivadas por la situación física o psicológica derivada de la violencia de género se considerarán injustificadas y no serán remuneradas, sin perjuicio de que dichas ausencias sean comunicadas por la trabajadora a la empresa a la mayor brevedad.

b) Las ausencias o faltas de puntualidad al trabajo motivadas por la situación física o psicológica derivada de la violencia de género se considerarán justificadas y serán remuneradas, cuando así lo determinen los servicios sociales de atención o servicios de salud, según proceda, sin perjuicio de que dichas ausencias sean comunicadas por la trabajadora a la empresa a la mayor brevedad.

c) Las ausencias o faltas de puntualidad al trabajo motivadas por la situación física o psicológica derivada de la violencia de género se considerarán justificadas, pero nunca serán remuneradas, cuando así lo determinen los servicios sociales de atención o servicios de salud, según proceda, sin perjuicio de que dichas ausencias sean comunicadas por la trabajadora a la empresa a la mayor brevedad.

d) Las ausencias o faltas de puntualidad al trabajo motivadas por la situación física o psicológica derivada de la violencia de género se considerarán injustificadas si bien serán remuneradas, cuando así lo determinen los servicios sociales de atención o servicios de salud, según proceda, sin perjuicio de que dichas ausencias sean comunicadas por la trabajadora a la empresa a la mayor brevedad.

49. De conformidad con el artículo 22.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución se podrá suspender, entre otros casos, cuando se soliciten informes preceptivos a un órgano de la misma o distinta Administración, por el tiempo que medie entre la petición y la recepción del informe. Este plazo de suspensión no podrá exceder en ningún caso de:

a) 3 meses. En caso de no recibirse el informe en el plazo indicado, caducará el procedimiento.

b) 1 mes. En caso de no recibirse el informe en el plazo indicado, proseguirá el procedimiento.

c) 1 mes. En caso de no recibirse el informe en el plazo indicado, caducará el procedimiento.

d) 3 meses. En caso de no recibirse el informe en el plazo indicado, proseguirá el procedimiento.

50. En relación con el reintegro de una subvención, señale la respuesta incorrecta:

a) El derecho de la Administración a reconocer o liquidar un reintegro de una Entidad colaboradora, prescribirá a los cuatro años desde el momento que venció el plazo para presentar la justificación.

b) El cómputo del plazo de prescripción se interrumpirá por la presentación de denuncia ante el Ministerio Fiscal.

c) Es causa de reintegro de una subvención la obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero por el órgano concedente.

d) No es causa de reintegro de una subvención el cumplimiento parcial de la actividad subvencionada.

51. De conformidad con el artículo 70.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los expedientes tendrán:

a) Formato electrónico y en papel y se formarán mediante la agregación ordenada de cuantos documentos, pruebas, dictámenes, informes, acuerdos, notificaciones y demás diligencias deban integrarlos, así como un índice numerado de todos los documentos asociados.

b) Formato electrónico y se formarán mediante la agregación ordenada de cuantos documentos, pruebas, dictámenes, informes, acuerdos, notificaciones y demás diligencias deban integrarlos, así como un índice numerado de todos los documentos asociados.

c) Formato electrónico y se formarán mediante la agregación ordenada de cuantos documentos, pruebas, dictámenes, informes, acuerdos, notificaciones y demás diligencias deban integrarlos, así como un índice numerado de todos los documentos que contenga cuando se remita.

d) Formato electrónico y en papel y se formarán mediante la agregación ordenada de cuantos documentos, pruebas, dictámenes, informes, acuerdos, notificaciones y demás diligencias deban integrarlos, así como un índice numerado de todos los documentos que contenga cuando se remita.

52. pregunta prevenciónEn atención a lo previsto en el artículo 41 de la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, los acuerdos en el Parlamento se adoptarán, por regla general:

a) Por mayoría absoluta.

b) Por mayoría simple.

c) Por mayoría de tres quintos.

d) Al menos por una mayoría de dos tercios.

53. Las competencias y el ejercicio de las competencias atribuidas a los órganos administrativos de las Administraciones Públicas:

a) No podrán ser desconcentradas en otros jerárquicamente dependientes de aquéllos en los términos y con los requisitos que prevean las propias normas de atribución de competencias.

b) No deberán ser descentralizadas en otros jerárquicamente dependientes de aquéllos en los términos y con los requisitos que prevean las propias normas de atribución de competencias.

c) Podrán ser desconcentradas en otros jerárquicamente dependientes de aquéllos en los términos y con los requisitos que prevean las propias normas de atribución de competencias.

d) Tendrán que ser descentralizadas en otros jerárquicamente dependientes de aquéllos en los términos y con los requisitos que prevean las propias normas de atribución de competencias.

54. Indicar que afirmación es correcta en relación con la regulación contemplada en el Capítulo II del Título IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sobre la iniciación del procedimiento administrativo:

a) El procedimiento, sometido al principio de celeridad, se impulsará de oficio en todos sus trámites y a través de medios electrónicos, respetando los principios de transparencia y publicidad.

b) Los interesados podrán, en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia, aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio.

c) Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán facultativos y no vinculantes.

d) Las oficinas de asistencia en materia de registros estarán obligadas a facilitar a los interesados el código de identificación si el interesado lo desconoce.

55. El plazo de prescripción de las sanciones impuestas en aplicación de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos personales y garantía de derechos digitales, empieza a contarse:

a) Desde el mismo día en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción o haya transcurrido el plazo para recurrirla.

b) Desde el mismo día que se dicte la resolución por la que se impone la sanción aunque no se haya notificado.

c) Desde el día siguiente a aquel en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción o haya transcurrido el plazo para recurrirla.

d) Las sanciones en materia de protección de datos no prescriben.

56. Según el artículo 98.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando de una resolución administrativa, o de cualquier otra forma de finalización del procedimiento administrativo prevista en la citada ley, nazca una obligación de pago derivada de una sanción pecuniaria, multa o cualquier otro derecho que haya de abonarse a la Hacienda Pública, este se efectuará preferentemente, salvo que se justifique la imposibilidad de hacerlo, utilizando alguno de los medios electrónicos siguientes: (señalar la respuesta INCORRECTA)

a) Domiciliación bancaria.

b) Tarjeta de crédito.

c) Giro Bancario.

d) Tarjeta de débito.

57. De conformidad con el artículo 107.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, respecto a la declaración de lesividad de los actos anulables, desde la iniciación del procedimiento sin que se hubiera declarado la lesividad, se producirá la caducidad del mismo transcurrido el plazo de:

a) 3 meses.

b) 6 meses.

c) 9 meses.

d) 12 meses.

58. Según el artículo 167 de la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias:

a) El régimen económico-fiscal de Canarias sólo podrá ser modificado de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional tercera de la Constitución, previo informe del Parlamento Canario que, para ser favorable, deberá ser aprobado por las dos terceras partes de sus miembros.

b) El régimen económico-fiscal de Canarias sólo podrá ser modificado de acuerdo con lo establecido en la disposición transitoria primera de la Constitución, previo informe del Parlamento Canario que, para ser favorable, deberá ser aprobado por las dos terceras partes de sus miembros.

c) El régimen económico-fiscal de Canarias sólo podrá ser modificado de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional tercera de la Constitución, previo informe del Parlamento Canario que, para ser favorable, deberá ser aprobado por los dos quintos de sus miembros.

d) El régimen económico-fiscal de Canarias sólo podrá ser modificado de acuerdo con lo establecido en la disposición transitoria primera de la Constitución, previo informe del Parlamento Canario que, para ser favorable, deberá ser aprobado por mayoría simple de sus miembros.

59. Conforme al artículo 89 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en relación con el impuesto sobre Actividades Económicas, su período impositivo:

a) Coincide siempre con el año natural.

b) Coincide con el año natural, excepto cuando se trate de declaraciones de alta, en cuyo caso abarcará desde la fecha de comienzo de la actividad hasta el final del año natural.

c) Estará en función de la actividad que se desarrolle.

d) Será el que establezca en cada caso cada municipio.

60. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, respecto a los derechos de las funcionarias públicas, señala que la funcionaria víctima de violencia de género tendrá derecho a:

a) Al aumento de su tiempo de descanso.

b) A la reducción o a la reordenación de su tiempo de trabajo.

c) A la suspensión de la relación laboral con reserva de su puesto de trabajo.

d) Al aumento de su tiempo de trabajo con aumento de retribuciones.

PREGUNTAS DE RESERVA

61. Según el artículo 1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, los Municipios:

a) Son entidades básicas de la organización territorial del Estado y cauces inmediatos de participación ciudadana en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades.

b) Son elementos básicos de la organización territorial del Estado y cauces inmediatos de participación ciudadana en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades

c) Son entidades principales de la organización territorial del Estado y cauces inmediatos de participación ciudadana en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades.

d) Son elementos fundamentales de la organización territorial del Estado y cauces inmediatos de participación ciudadana en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades

62. De acuerdo con el artículo 90 del Real Decreto Legislativo 5/2025, de 30 de octubre, por el que se aprueba en Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la suspensión de funciones firme se impondrá en virtud de:

a) Sentencia dictada en causa criminal o en virtud de sanción disciplinaria.

b) Sentencia dictada en causa civil o criminal o en virtud de sanción disciplinaria

c) Sanción disciplinaria, exclusivamente.

d) Sentencia firme en causa civil o criminal, exclusivamente.

63. Según la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, el incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de prevención de riesgos tendrá la consideración de:

a) Incumplimiento contractual a los efectos previstos en el Estatuto de los Trabajadores o de falta conforme a la normativa sobre régimen disciplinarios de los funcionarios públicos o del personal estatutario al servicio de las Administraciones Públicas.

b) Incumplimiento laboral a los efectos previstos en el Estatuto de los Trabajadores o de falta conforme a la normativa sobre régimen disciplinarios de los funcionarios públicos o del personal estatutario al servicio de las Administraciones Públicas.

c) Solo en caso de faltas.

d) Solo en caso faltas y sanciones.

64. En cuanto a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, señálese la respuesta incorrecta:

a) En las Entidades Locales, será la Intervención u órgano que designe la propia Entidad, la responsable de suministrar la información de las subvenciones otorgadas.

b) La falta de suministro de información por parte de las Administraciones que están obligadas a hacerlo a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, constituye infracción muy grave.

c) El contenido de la Base de Datos Nacional de Subvenciones, deberá contener la identificación de las personas o entidades incursa en prohibición de obtener subvenciones.

d) La Base de Datos Nacional de subvenciones no podrá suministrar información sobre las sanciones firmes impuestas infracciones muy graves.

65. En atención a lo previsto en el artículo 64.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el acuerdo de iniciación en los procedimientos de naturaleza sancionadora deberá contener al menos, entre otros extremos, los siguientes:

a) Los hechos que motivan la incoación del procedimiento, su posible calificación y las sanciones que pudieran corresponder, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción.

b) Identificación del Secretario y, en su caso, Instructor del procedimiento, con expresa indicación del régimen de recusación de los mismos.

c) Medidas de carácter definitivo que se hayan acordado por el órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador.

d) Identificación de la persona o personas presuntamente lesionadas.